JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE MOSQUERA

MOSQUERA CUNDINAMARCA

Noviembre treinta (30) de dos mil veintiuno

CONSULTA No. 2021-01608

MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO.

Se resuelve la CONSULTA a la DECISIÓN SANCIONATORIA proferida por la COMISARÍA SEGUNDA DE FAMILIA de esta municipalidad el 2 de febrero de 2021, mediante la cual se declaró probado el **PRIMER INCUMPLIMIENTO A LA MEDIDA DE PROTECCIÓN** impuesta en favor de **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN** y en contra de **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, y se le sancionó con **MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES**.

ANTECEDENTES

TRÁMITE DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN

1.- El 4 de abril de 2017, **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN**, denunció que su excompañero y padre de su hijo **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, la agredió física y verbalmente por lo cual ella solicita la medida de protección sobre ella para que alleguen a unos acuerdos y los mismos se cumplan.

2.- En la misma fecha la Comisaría Segunda de Familia, **ADMITE y avoca conocimiento** de la acción de violencia intrafamiliar en contra de **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, ordenándose entre otros la medida de protección provisional a favor de **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN**, para lo cual se ordena oficiar al Comando de Policía con el objeto de prestar vigilancia necesaria al lugar donde reside

Además, se ordena conminar a **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, con el fin de que cese todo acto de violencia y/o maltrato físico y psíquico en contra **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN** y su grupo familiar.

Igualmente se ordenó citar a **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, a fin de que presentara sus descargos y solicitara las pruebas que considerara necesarias y se fijó fecha para el lunes quince (15) de mayo de 2017 a las dos de la tarde (2:00 p.m).

3.- En la diligencia realizada el 15 de mayo de 2017 (págs., 34 a 39), se dejó constancia que la parte accionada se hizo presente a la audiencia, procediendo a evacuar todas las etapas procesales y se profirió decisión, avalar el acuerdo entre las partes **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN y WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, así:

“SE AVALA el acuerdo celebrado entre las partes, según el cual las partes **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**, con C.C. No. 1.073.521.930 de Funza y **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN**, C.C. No. 1.016.100.812 de Bogotá, se comprometen a cesar inmediatamente y/o abstenerse de todo acto de maltrato físico, verbal, psicológico, amenaza, intimidación, manipulación, ofensa o

cualquier otra forma de agresión entre ellos, frente o contra su hijo DILAN SANTIAGO MORENO LONDOÑO, de 10 meses de edad, con NUIP 1.073.522.696 de la Registraduría de Funza y sin perjuicio de que se tomen las medidas de protección a que haya lugar a favor del niño, por ser procedente legalmente y viable para la solución del conflicto .”

Además, se le ordena a **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS** la obligación de realizar un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios y a la señora **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN** de asesoría, orientación y empoderamiento.

EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO

1.- Vistas las diligencias se tiene que obra auto de 20 de julio de 2020, por el cual se avocó conocimiento de la queja e incumplimiento a la medida de acuerdo N° 034-2017, impuesta el 15 de mayo de 2017 entre las partes **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN** y **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**

2.- Mediante audiencia de pruebas y fallo incidente de desacato del 2 de febrero de 2021 la Comisaria de Conocimiento, declara probado el primer incumplimiento al acuerdo mencionado en el punto anterior, por parte de **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**

3.- Igualmente sanciona al incidentado con multa de DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES convertibles en arresto en caso de no pagar lo allí ordenado.

4.- Finalmente ordena y prohíbe el ingreso de **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS** en la vivienda de habitación o en cualquier lugar donde se encuentre la señora **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN**, para evitar que perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma infiera o cause daño.

CONSIDERACIONES.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la ley 294 de 1996, modificado por el artículo 4° de la Ley 575 de 2000, “el incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones:

a). Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la imposición. La conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que solo tendrá recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo;

b). Si el incumplimiento a la medida de protección se repitiere en el plazo de dos años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días”.

La imposición de las referidas sanciones debe estar precedida del trámite a que alude el artículo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 11 de la ley 575 de 2000, en el cual deben respetarse las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, en particular, la notificación del accionado, con la respectiva posibilidad de controvertir la solicitud de medida de protección, la

petición y la práctica de pruebas, y la garantía de que la decisión adoptada se funde en las normas aplicables y las pruebas recaudadas.

En este punto, es importante resaltar que quienes tenemos la misión de administrar Justicia, constituye una OBLIGACIÓN aplicar el enfoque diferencial de género en todas nuestras decisiones, enfoque que consiste en el deber de reconocer, en caso de que ello sea relevante, la asimetría que puede existir entre mujeres y hombres por relaciones de poder, como lo ha considerado la Corte Constitucional, entre otras, en Sentencia T-338 de 2018.

Entonces, para el presente caso se tiene que se trata de una mujer y madre, quien asegura que ha sido víctima de violencia verbal y psicológica reiterada, por parte de su ex compañero.

Es relevante, entonces, acudir al citado enfoque diferencial, teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que conducen a perpetuar la discriminación contra la mujer, obstaculizando su pleno desarrollo, según expuso la H. Corte Constitucional en la sentencia T-967 de 2014.

La perspectiva de género, como enfoque diferencial, tiene como finalidad, la de hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad material, previsto en el artículo 13 de la Constitución Nacional, derecho que debe ser garantizado por los Estados, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, lo que lleva a concluir que se trata de una obligación de las autoridades judiciales aplicarla al interior de los procesos.

En palabras del máximo Tribunal de lo Constitucional Sentencia SU – 080 de 2020, magistrado ponente Dr. José Fernando reyes Cuartas:

“(…) analizar con perspectiva de género los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o víctimas: i) no implica una actuación parcializada del juez en su favor; reclama, al contrario, su independencia e imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos de género[106] discriminatorios, y; iii) en tal sentido, la actuación del juez al analizar una problemática como la de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la temática en cuestión -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios al construir una interpretación pro fémina, esto es, una consideración del caso concreto que involucre el espectro sociológico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminación ejercida sobre la mujer”.

Ahora, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de todo tipo de violencias y discriminación, ha sido consagrado ampliamente en instrumentos internacionales – ratificados por el Estado colombiano y que prevalecen sobre el ordenamiento jurídico interno como lo estipula el art. 93 de la Constitución Política- tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW (1981) y la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

En el ámbito nacional, uno de los avances más significativos en estándares de garantía y protección a las mujeres víctimas de violencias es la Ley 1257 de 2008, que se debatió y aprobó debido al gran rol del movimiento de mujeres y la bancada de mujeres en el congreso. Esta ley busca crear mecanismos para la prevención, atención y sanción de todo tipo de violencias en cabeza de diferentes instancias del Estado y con los deberes de la sociedad civil y la familia.

De igual manera, la Corte Constitucional ha trazado una línea jurisprudencial estable, frente a la obligación de las autoridades judiciales de aplicar el enfoque diferencial de género en casos de violencia contra las mujeres, con el fin de administrar justicia de manera efectiva, en cada caso concreto. Particularmente, nos referimos a las sentencias T-878 y T-967 de 2014, T-241 y T-012 de 2016, T-027, T-145 y T-735 de 2017, T-240, T-311 y T-338 de 2018, T-093 de 2019, así como la reciente Sentencia SU – 080 de 2020.

En el presente asunto, estudia el Juzgado la CONSULTA a la decisión sancionatoria proferida por la COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA de esta Municipalidad el 19 de octubre pasado, decisión que se confirmará, como quiera que, fueron acreditados los hechos de incumplimiento a la medida de protección, con la prueba documental allegada.

Sin más consideraciones el **JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión calendada **2 DE FEBRERO DE 2021** proferida por la **COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA DE MOSQUERA** al interior de la **MEDIDA DE PROTECCIÓN** promovida por **LAURA CATHERINE LONDOÑO PACHÓN** y en contra de **WILMER MATEO MORENO CUBILLOS**.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes, por el medio más expedito.

TERCERO: Por secretaría y previas las constancias del caso, **DEVOLVER** las presentes diligencias al Despacho de origen.

CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia, por contener la firma electrónica se entiende que se presume auténtica y la misma podrá ser validada a través del siguiente link:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica/validarDocumento>

NOTIFIQUESE,

Firmado Por:

**Maria Del Pilar Oñate Sanchez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 001
Mosquera - Cundinamarca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1211c080c03504212e0cde7f6209a8838d20772eeca16ea59bdadd93cd117ffa**

Documento generado en 30/11/2021 12:56:06 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA
ESTADO N° 126 DEL PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021) FIJADO A LA HORA DE LAS 8:00 A.M.**

**BERNARDO OSPINA AGUIRRE
SECRETARIO**